



Proceso	Verbal - declaración de existencia de sociedad de hecho en estado de liquidación
Demandante	José Joaquín Estrada Restrepo
Demandado	María Gilma Gallego Zapata y Jorge Humberto Álzate Gallego y el curador <i>ad litem</i> de Gustavo, Jorge Iván , Diego, marta Fany, gloria y María Claudia gallego Ospina; Henry Hernando, Luz Marina, Blanca Nubia, Elkin Alberto, Giovany, Albeiro, Alba María y Norela del socorro Gallego Álzate; Mónica y Juan Felipe Gallego Ruiz; Edwin y Berta Gallego Restrepo; Mariela, María Gilma y María Teresa Gallego Zapata; herederos indeterminados de Rosa Gallego Zapata y terceros indeterminados
Radicado	05360 31 03 001 2016 00342 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Sentencia	No 015
Decisión	Niega casación. No allegó dictamen
Tema	Si se trata de asuntos netamente patrimoniales, el artículo 339 <i>ídem</i> establece que: “ <i>cuando sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión</i> ”; el recurrente debe acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso, es labor del funcionario constatarlo, y en caso contrario corre a cargo del recurrente la carga de “ <i>aportar un dictamen pericial</i> ”, cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria.

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

2022-031

SALA CUARTA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado del demandante José Joaquín Estrada Restrepo, interpone recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia revocatoria dictada el 14 de diciembre de 2022, con fundamento en el artículo 334 del C. General del Proceso-

I. ANTECEDENTES

1. Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:

“PRIMERA. Declarar que desde el año de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el día 15 de junio de dos mil trece (2013), existió una sociedad civil de hecho, celebrada intuitu personae, es decir, en razón de la consideración de las personas, entre el señor JOSE JOAQUIN ESTRADA RESTREPO y la señora ROSA GALLEGO ZAPATA, de las condiciones civiles anotadas, cuyo objeto social civil fue la construcción de viviendas urbanas para la morada propia de los socios y para obtener rentas comunes para contribuir a asumir los gastos personales de los asociados.

“SEGUNDA. Declarar que la citada sociedad se terminó o disolvió en razón fallecimiento de la señora ROSA GALLEGO ZAPATA, acaecido el día 15 de junio de 2013, en el Municipio de Medellín.

“TERCERA. Ordenar o decretar la liquidación de la mencionada de hecho. Es decir, en términos generales, que se proceda a pagar el pasivo externo, a recaudar las acreencias de terceros a favor de la sociedad, proceda a restituir el capital sobrante entre los asociados...”.

2. El 6 de mayo de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí profirió sentencia en la que dispuso:

“PRIMERO: DESESTIMAR los medios exceptivos o de defensa propuestos por los demandados.

“SEGUNDO: Declarar que entre los señores José Joaquín Estrada Restrepo y la señora Rosa Gallego Zapata, existió una sociedad civil de hecho desde el 31 de diciembre de 1983 hasta el 15 de junio de 2013, según lo expuesto.

“TERCERO: Ordenar la liquidación de la sociedad civil de hecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión...”.

3. La Decisión anterior fue apelada por ambas partes, impugnación resuelta por el Tribunal en providencia del 14 de diciembre último, revocatoria de la decisión inicial.

4. Dentro del término el apoderado de la parte actora interpuso recurso extraordinario de casación, por lo que procede la Sala a resolver, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. El artículo 334 del Código General del Proceso, establece que el recurso extraordinario de casación procede para ser interpuesto solo contra determinadas sentencias en atención a la naturaleza del proceso en el que hayan sido proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, entre las que se cuentan:

“1. ...las dictadas en toda clase de procesos declarativos. ...”, y procede “...cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a unos mil salarios mínimos legales

mensuales vigentes (1000 smlmv). ...”, salvo cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (Art. 338 lb.), caso en el que ese elemento patrimonial no se tiene en cuenta. (Subrayas intencionales)

Deduciéndose entonces que, cuando se trate de procesos verbales como el del asunto sometido a estudio, se requiere como elemento constitutivo del interés para recurrir en casación, que el agravio pecuniario inferido al recurrente alcance al menos el mencionado umbral económico.

2. Se precisa entonces, que el agravio se determina a la fecha en que el fallo fue proferido, y no antes ni después como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia entre otros, en auto, AC4040 de 2021

“El interés para recurrir en casación, entonces, refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia impugnada, concepto que «(...) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (...) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC7638-2016, 8 nov.).

“Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala:

«(...) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las

demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.).

“En síntesis, la actualidad de la afectación, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC924-2016, 24 feb.).”

3. Por lo demás, *“Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión” (artículo 339 ib.).*

Significa lo anterior que el recurrente debe acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso, es labor del funcionario verificarlo, y en caso contrario corre a cargo del recurrente la carga de *“aportar un dictamen pericial”*, cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el impugnante extraordinario asume los efectos adversos de su desidia probatoria.

4. Ha sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que *«el interés pecuniario del agraviado ha de determinarse a través de las probanzas recaudadas a lo largo del*

litigio, salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resolución confutada es suficiente para promover esta herramienta» (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original).¹

En pronunciamiento reciente dijo el alto Tribunal:

“.. 10. Frente a tal tópico, la Sala también ha insistido en que la labor del juez en orden a determinar el interés para recurrir, no se concreta solamente en «auscultar el elemento objetivo de la petición (la cosa o el bien y la relación jurídica reclamada), sino que debe acudir a la integralidad de ella, lo que involucra la causa para pedir (razón de hecho)» (AC725-2021, 8 mar.). De esta manera, «no basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensión no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que específicamente no se reclame la imposición de condenas estimables en términos pecuniarios en un determinado proceso, ésta puede catalogarse como “esencialmente económica”, mirada desde todos los elementos que la conforman.» (subraya la Corte, CSJ AC390-2019, criterio reiterado en AC725-2021, 8 mar.).

“11. Zanjado lo anterior, como se debe determinar el interés económico para la concesión del recurso de casación, es menester traer a colación lo contemplado en el artículo 339 del C.G.P. que establece que en el evento de no aparecer precisada la afectación económica para recurrir en casación, el interés deberá fijarse “con los elementos de juicio que obren en el expediente”, permitiéndose al recurrente, cuando este lo estime pertinente, aportar una experticia a efectos de precisar el justiprecio....”²

5. De conformidad con las disposiciones legales y los prolegómenos jurisprudenciales anteriores, conviene recordar que en el proceso del mismo jaez al que se hizo alusión en el fallo que ahora es impugnado de manera extraordinaria, radicado 05001 31 03 014 2003 00412 03 fue concedido el recurso de casación

¹ Citado en AC208 de 2022

² AC568 de 2022

mediante auto del 15 de abril de 2006, pero su otorgamiento obedeció a que la estimación del agravio estuvo precedida de dictamen pericial concretamente avalúo de los bienes inmuebles allí descritos.

En el asunto que ahora convoca el Tribunal la interposición del recurso estuvo huérfana de dictamen pericial, es decir, el recurrente consideró innecesario aportar uno, de tal suerte que la cuantía solo puede establecerse con los elementos de juicio que obran en el expediente que no son otros que el avalúo catastral de los bienes raíces en la demanda (hecho 8), cuya sumatoria asciende a \$127.464.256, y frente a las joyas ninguna estimación pecuniaria se hizo, amén de que como lo advirtió alguno de los convocados ninguna relación concreta de elementos de esa naturaleza hizo el convocante.

6. De lo anterior resulta, que el interés económico que José Joaquín Estrada Restrepo que se vio afectado con la sentencia del Tribunal es notoriamente inferior a la suma prevista en el artículo 334 del C. General del Proceso, resultando improcedente la impugnación extraordinaria formulada contra la providencia proferida por el Tribunal.

En mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión,**

RESUELVE

NEGAR el **Recurso Extraordinario de Casación** interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la

sentencia proferida por el Tribunal el 14 de diciembre del año anterior, por falta de justiprecio del interés para recurrir en casación.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **18422c08dc1f6db5531fc7e457533a15138c8c692cd7da75042585f08ca54577**
Documento generado en 24/03/2023 02:38:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>